



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL “ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO Y ALOJAMIENTO PARA JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS EN SITUACIÓN O GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL”, SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS 2021-2027, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

I.- ÁMBITO COMPETENCIAL Y ANTECEDENTES

La Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 26.1.23 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene atribuida competencia exclusiva en materia de, entre otras, promoción y ayuda a los *“demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”*.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Sociales e Integración, conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que otorga a su titular atribuciones en materia de inclusión social. Concretando en su artículo 5, las atribuciones de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración a la que corresponden, entre otras, las siguientes: *“el impulso de políticas de servicios sociales y la coordinación en materia sociosanitaria con la consejería competente en dicha materia, en relación con las personas y grupos en situación o riesgo de exclusión social, personas sin hogar, inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos de población en situación de necesidad o de vulnerabilidad social, así como la gestión de las prestaciones que, en su caso, se deriven de ellas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos”*.

En virtud de esta habilitación competencial, la Dirección General de Servicios Sociales e Integración gestiona el *“Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de: “acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid”*, que comenzó el 1 de enero de 2023. Este acuerdo marco ha sido financiado en 2023 mediante Fondos React-UE, y en 2024 y 2025 mediante el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, acuerdo marco del que el acuerdo marco que ahora se propone es heredero directo.

En la actualidad, este servicio cuenta con un total de 154 plazas de las 160 potenciales por abandono del mismo de una entidad, engloba 29 pisos de autonomía y 13 entidades. Además, dada la interrelación de la materia, la salvaguarda del bienestar de los jóvenes y la pretensión de dar continuidad al trabajo desarrollado cuando eran menores, se presta en estrecha colaboración con la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. Por otra parte, la Dirección General de Servicios Sociales e Integración gestiona otro contrato de 13 plazas en el que se desarrolla el mismo servicio, sumando un total de 167 plazas distribuidas en 2 instrumentos jurídicos.

La experiencia de la Comunidad de Madrid con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que, al alcanzar la mayoría de edad y cesar, en consecuencia, la acción jurídica protectora, ha de hacerse un tránsito a la vida adulta acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección. El tránsito a la vida adulta se



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta, sin duda especialmente “vulnerable”, por doble partida, por escasez de recursos personales, y por la inexistencia, o presencia limitada, de un entorno social y familiar que ofrezca los apoyos necesarios y agravado, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial.

En el momento de inicio del acuerdo marco que finaliza el 31 de diciembre de 2025, la Comunidad de Madrid contaba con 115 plazas concertadas con 16 entidades diferentes y financiadas, tanto por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (102 plazas), como por la entonces Dirección General de Integración (13 plazas, contrato mencionado anteriormente) con plena ocupación.

En la actualidad, se ve necesaria consolidar y centralizar las 173 plazas existentes de pisos de autonomía (Lote 1), es decir, sumar a las 160 plazas totales del acuerdo marco a las 13 gestionadas mediante un contrato ordinario (Expte.: 196/2024 (Antec.: 150/2020, 152/2022, 196/2023) A/SER-025685/2020C01-PR03).

Asimismo, siguiendo la intención de centralizar y racionalizar en un único expediente administrativo la atención a jóvenes en situación o grave riesgo de exclusión social, el servicio se amplía para dar atención también a aquellos jóvenes que estén en esa situación y que no provengan necesariamente del Sistema de Protección. Concretamente, junto a la consolidación y continuidad de los pisos de autonomía (Lote 1), también se incluyen en este acuerdo marco 30 plazas para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social y vulnerabilidad en su salud mental, con o sin discapacidad intelectual leve, procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid, que actualmente se encuentran conveniadas por la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad (Lote 2); la ampliación del servicio Housing First for Youth que actualmente tiene conveniado la Dirección General de Servicios Sociales e Integración, pasando de 10 a 40 plazas (Lote 3).

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Los jóvenes en situación de vulnerabilidad son un grupo de alto riesgo con el que es urgente trabajar para evitar que pasen a formar parte del colectivo de personas sin hogar y en situación de extrema exclusión.

En España, según datos publicados en el INE en el año 2022, se observa un crecimiento de personas sin hogar en edades tempranas, con especial peso de personas extranjeras. En concreto, se estima que un 21,1% de las personas en situación de sin hogar tiene entre 18 y 29 años, de las cuales un 23,3 % es población nacional, frente al 76,6% de población extranjera.

En el caso de la Comunidad de Madrid, según los Indicadores de Sectores de Atención Social, en el momento de la presente memoria existen en el Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid 3.215 menores tutelados, 1.554 de ellos en acogimiento residencial.

Concretamente, según los datos proporcionados por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, en el año 2024 se valoraron a un total de 463 jóvenes en la Comisión de Jóvenes, 413 cumplieron la mayoría de edad en ese año, 287 de los cuales eran adolescentes



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

migrantes no acompañados, perfil que ha ido en aumento hasta representar el 67% de los jóvenes del Sistema de Protección que cumplieron mayoría de edad en el año 2024.

En general, se observa un aumento constante de los jóvenes que cada año salen del Sistema de Protección. Así, si en el año 2016 cumplieron mayoría de edad 178 jóvenes, en 2021 lo hicieron 301 y, como acaba de mencionarse, fueron 413 en el año 2024; es decir, que en 3 años se ha producido un aumento del 37% de los jóvenes que salen del Sistema de Protección, aumento que alcanza el 132% si se toma como año referencia el 2016.

En el año 2024, de esos 413 jóvenes mencionados, 307 participaron en el Plan de Autonomía, es decir, el 74%. Como se ha señalado, este año destaca el elevado número de adolescentes migrantes no acompañados con poco tiempo de estancia hasta la mayoría de edad en los recursos residenciales que no han podido iniciar el Plan de Autonomía (69% de los jóvenes valorados en la Comisión de Jóvenes). De estos 413 jóvenes, 36 tenían alguna discapacidad, 13 reconocido algún grado de dependencia.

A nivel administrativo, el 68% de esos jóvenes (204) no contaban con permiso de residencia y trabajo.

Por tanto, además de este aumento cuantitativo, se ha venido observando un cambio cualitativo de los jóvenes que salen del Sistema de Protección, con un número creciente de jóvenes que no tienen permiso de trabajo al llegar la mayoría de edad, la mayoría en espera de su resolución por lo que consiguen poco tiempo después del cumplimiento de 18 años. La falta de documentación ocasiona una imposibilidad de incorporación laboral, de formación y de poder elaborar un proyecto de futuro. La razón principal de esta tendencia es el escaso tiempo de estancia en los recursos de protección por incorporarse a una edad cercana a los 18 años y también se observa que los tiempos de tramitación se están dilatando.

De los 463 jóvenes valorados en 2024, 176 han sido derivados al Acuerdo marco y 15 al contrato ordinario, es decir, que el 41% de los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad se ha beneficiado de un piso de autonomía (ahora Lote 1). Además, 8 se han derivado a los recursos que la DGIFFN tiene conveniados para dar el servicio que se incorpora en el Lote 2, y 5 se han derivado al convenio que para el año 2024 mantiene la DGSSI con 2 entidades (que pasa a integrarse y ampliarse en el Lote 3).

Como nota negativa, 85 jóvenes se han emancipado con riesgo de exclusión social, es decir, un 18%.

Por otro lado, la edad de emancipación, en gran parte de los países de nuestro entorno, se ha ampliado hasta casi los 30 años y la crisis económica y social afecta, en mayor medida, a la empleabilidad de los jóvenes. Todo ello posiciona al colectivo de extutelados en una situación de desigualdad respecto del resto de jóvenes de su edad, por lo que se impone que puedan contar con apoyo social y educativo, así como con alojamiento y manutención, que faciliten el tránsito a la vida adulta para todos aquellos que lo necesiten.

El **Informe sobre la Vulnerabilidad Social 'Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social'**, realizado por Cruz Roja en el mes de septiembre del 2020, antes de que se implementase el acuerdo marco, señalaba que, en ese momento, el 84% de los jóvenes extutelados atendidos



Fondos Europeos



Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

en el marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión, el 81,5% estaba en paro, el 84% no recibía ninguna prestación o subsidio, un 10% se veía obligado a vivir en la calle o en situación de alta precariedad y el 55% no tenía a nadie que le expresase afecto, cariño o acompañe. El 31% eran españoles y el 66% extranjeros extracomunitarios.

La situación y la realidad de los jóvenes (extutelados o no) ha sido objeto de una cada vez mayor atención interés de los poderes públicos a este respecto, tanto a escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los Programas Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020, los nuevos objetivos políticos y específicos del Fondo Social Europeo Plus en el marco del período de programación 2021- 2027, los objetivos operativos definidos por los Planes Estratégicos de las distintas Administraciones Públicas, así como la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, que actualizan diferentes cuerpos legislativos, para adecuarlos a los cambios sociales producidos en los últimos años así como a la normativa internacional reciente. En particular, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor contempla ahora, **en su artículo 22 bis, que las Entidades Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad**, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. En la misma dirección ha ido la normativa y los planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas

Para dar respuesta a esta necesidad social, la Comunidad de Madrid, ha implementado el **Plan de Autonomía Personal 16-21**, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este Plan cuenta con dos programas, **el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el Programa de Tránsito a la Vida adulta 18-21**. Éste último, para mayores de 18, contempla ampliar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión social. Para ello, se han identificado tres áreas de intervención: alojamiento y manutención, inserción sociolaboral e intervención familiar.

Por todo lo anteriormente expuesto, la ahora Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad articuló con entidades de la iniciativa social, coincidentes en sus objetivos con las competencias de la Administración, una serie de convenios para fomentar la colaboración mutua y prestar la atención a los jóvenes que, habiendo pertenecido al sistema de protección infantil, cumplieran la mayoría de edad y se encontraban en situación de dificultad y desventaja social, para procurar su tránsito a la vida adulta en condiciones satisfactorias que les permitiera alcanzar la plena autonomía y prevenir el riesgo de exclusión social, trabajando para que todos tengan igualdad de oportunidades, desarrollando su potencial y fomentando su responsabilidad social, apoyando sus procesos de formación e inserción laboral.

Todo ello justifica no solo el mantenimiento de las plazas de los pisos de autonomía (Lote 1) si no también la necesaria adaptación y actuación administrativa, en este caso mediante la



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

incorporación de otros servicios que den respuesta a esta realidad evolutiva y cambiante de los jóvenes que salen del Sistema de Protección actualmente.

III.- VENTAJAS DEL INSTRUMENTO DEL ACUERDO MARCO

Tras la puesta en marcha del actual acuerdo marco en vigor, se ha visto su ventaja frente a los otros instrumentos administrativos que se venían utilizando (fundamentalmente convenios de colaboración o convenios-subvención), ya que ha dotado de la estabilidad necesaria para trabajar la autonomía con estos jóvenes, por lo que se da la oportunidad de dar continuidad al trabajo que se realiza con jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid, a través de la convocatoria de una Acuerdo Marco, que permite no solo optimizar los recursos que se invierten durante su minoría de edad (la no continuidad del proceso, en algunos casos, supone que la inversión pública realizada en esos menores no es eficiente ni eficaz), sino lo que es más importante, dar estabilidad emocional a los menores amparados por la Red, lo que favorecerá su integración en la sociedad adulta de manera más fácil.

También se hace necesaria una homogeneización de las condiciones de la prestación, a fin de garantizar la igualdad a los usuarios y una racionalización del sistema desde el punto de vista administrativo, dando a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en cuanto a su forma de concertación (convenio/contrato) así como a su seguimiento. Se considera, asimismo, que el sistema de contratos basados en el Acuerdo Marco economiza la gestión administrativa, gracias a la unificación en un procedimiento de los trámites necesarios, pudiendo disponer de forma inmediata de una bolsa de licitadores y logrando una contratación más ágil y eficiente.

Asimismo, durante estos años de implementación se ha procedido a elaborar documentos, guías de procedimiento y protocolos con el fin de homogeneizar los distintos procesos de gestión del mismo, desde las plantillas de documentos a utilizar, su periodicidad hasta la metodología de intervención con los jóvenes desde la entrada, la estancia en el piso y la salida del mismo.

Por otra parte, y con el objetivo de favorecer la concurrencia de empresas y, sobre todo, de entidades de iniciativa social e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos propios, resulta conveniente la licitación de un total de 173 plazas en el Lote 1, 30 en el Lote 2 y 40 en el Lote 3.

En conclusión, el Acuerdo Marco tiene importantes ventajas frente al sistema de concertación de plazas que se realizaba anteriormente (convenios de colaboración, convenios-subvención y/o contratos de emergencia), como pueden ser:

1) Respecto a la prestación del servicio:

- Se da continuidad a los proyectos de intervención que se desarrollan antes de cumplir la mayoría de edad.
- El aumento de los mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones durante la ejecución de los contratos, así como la actividad centralizadora y coordinadora de la Administración, fomenta la calidad de la atención prestada a los mismos en cada uno de los centros y servicios.



Fondos Europeos



Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

2) Respetto al procedimiento de contratación:

- Homogeneidad: Se trata de establecer un marco único de actuación para las empresas y entidades que prestan el servicio en este tipo de recursos, desde la perspectiva contractual.
- Simplificación y agilización del procedimiento de licitación y adjudicación de los contratos basados: Durante el desarrollo del Acuerdo Marco, la contratación se realiza de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a nueva licitación y sin tener que realizar prórrogas anuales de recursos actuales, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

3) Respetto al presupuesto de licitación:

- Se considera que el presupuesto de licitación de la plaza ocupada/día está equilibrado respecto al precio real de mercado de las plazas de acogimiento residencial, lo que permitirá obtener una homogeneización de las ofertas presentadas por los licitadores.

A nivel de resultados, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, 414 jóvenes han pasado por los pisos de autonomía (Lote 1), 168 de ellos saliendo con autonomía, representando las salidas autónomas cerca del 60% de las salidas.

IV.- ENCAJE CON FONDOS EUROPEOS

Por lo que se refiere a la financiación de este Acuerdo Marco, el coste se imputará al Programa presupuestario 232E "Integración, Participación y Lucha contra la exclusión", cuya gestión es responsabilidad de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración, si bien se va a solicitar su cofinanciación por fondos europeos, a través del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, a través del objetivo específico "*promover la integración social de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular las más desfavorecidas y los niños*" (ESO4.12).

En definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un acuerdo marco para la gestión del "Acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 25 años en grave riesgo de exclusión social", a fin de satisfacer las necesidades planteadas.

En Madrid, a fecha de firma.

Firmado digitalmente por: AYRES JANEIRO FERNANDO IGNACIO

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Fdo. D. F. Ignacio Ayres Janeiro